

SEÑOR(A)

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERIA- (REPARTO)

E. S. D.

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA – MECANISMO TRANSITORIO
ACCIONANTE	NIDIA ESTHER MUÑOZ PEREZ
ACCIONADO	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
DERECHOS VULNERADOS	ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR FUERO DE PREPENSIONADO, SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE Y LA ENTIDAD CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCIÓN

NIDIA ESTHER MUÑOZ PEREZ, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con C.C. 50.846.751 de Cereté – Córdoba, actuando en nombre propio, comedidamente manifiesto a usted que por medio del presente escrito entablo ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA para la protección de los derechos fundamentales a la Estabilidad Laboral Reforzada por Fuero de Prepensionado, Trabajo, Mínimo Vital, Debido Proceso y demás que se configuren y se hallen probados en esta situación judicial en contra del Departamento de Córdoba, representado legalmente por el señor Orlando David Benítez Mora, en calidad de Gobernador del Departamento de Córdoba, del señor Leonardo José Rivera Varilla, como Secretario de Educación Departamental de Córdoba, y de la señora Mónica María Moreno, como Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, o quien haga sus veces, por hechos y omisiones que me perjudican directa y gravemente, los cuales me permito narrar a continuación:

1. HECHOS Y OMISIONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD DE AMPARO

1.1 PRIMERO: Mediante Decreto No. 000458 de 1989, expedido por el Despacho del Gobernador de Córdoba, fui nombrada en propiedad en el cargo de Secretaria del Colegio Departamental de Bachillerato “José Antonio Galán” en el municipio de Cereté, adscrito a la Secretaría de Educación Departamental.

1.2 SEGUNDO: Dicho nombramiento se hizo efectivo mediante Acta de Posesión de 19 de mayo de 1989, por la cual tomé posesión del cargo frente al Gobernador de Córdoba.

1.3 TERCERO: Mediante Decreto 1060 de 2016, se me incorporó a la Planta de Cargos Administrativos de la Secretaría de Educación Departamental, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones. Dicho decreto, en su artículo segundo resaltó que:

*Artículo Segundo. Los empleados que se incorporan a la Planta de Cargos Administrativos de la Secretaría de Educación Departamental, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, **conservaran los***

derechos de carrera administrativa y demás derechos laborales adquiridos y no se requerirá tomar posesión al cargo al cual fueron incorporados”

1.4 CUARTO: Mediante Acuerdo No. 20191000002006 del 05 de marzo de 2019, se establecieron las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación de Córdoba – Convocatorio No. 1106 de 2019 – Territorial 2019.

1.5 QUINTO: Es válido resaltar que me presenté al mencionado Concurso de Méritos, en aras de obtener la propiedad definitiva en el cargo público, pero lastimosamente no superé el concurso.

1.6 SEXTO: De esa forma, y aun así reconociendo la entidad empleadora que me cobija una protección constitucional especial, como lo es el fuero de prepensionado, bajo el elemento y a sabiendas de mi condición especial la cual se configura como un estado de debilidad manifiesta, se convocó a concurso para proveer una vacante definitiva en el mencionado proceso de selección; ello derivó a que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidiera la Resolución N.º 5070 de 9 de noviembre de 2021, por la cual se conformó y adoptó lista de elegibles para proveer vacantes definitivas del empleo denominado Secretario, Código 440, Grado 07 de la Planta de Personal de la Secretaría de Educación Departamental.

1.7 SEPTIMO: El 08 de marzo de 2022, mediante Oficio Nro. 000227, el Dr. Hernando de la Espriella Burgos, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Córdoba, emite concepto dirigido a la Dra. Juanita Nieto Guzmán y al Dr. Leonardo Rivera Varilla sobre la estabilidad laboral reforzada en los empleados públicos en provisionalidad que no superaron el concurso de méritos, haciendo salvedad a folios 1 y 2 sobre lo dicho por la Corte Constitucional con respecto al fuero de prepensionado.

1.8 OCTAVO: En este sentido, siendo consciente que cuento con 59 años y 1252 semanas cotizadas en el Sistema General de Seguridad Social en Pensión, y cuento con una expectativa legítima para obtener mi pensión, elevé derecho de petición al Secretario de Educación Departamental, con el fin de indagar sobre el reconocimiento de mi calidad de prepensionada y sobre mi nombramiento en propiedad. Dicha petición fue radicada en el SAC el día 25 de mayo de 2022 con el radicado COR2022ER014363, petición que hasta la fecha no ha sido respondida.

1.9 NOVENO: Desconociendo mi condición de prepensionada, y el fuero constitucional que ello implica, mediante Decreto No. 000568 del 16 de junio de 2022, el Secretario de Educación de Córdoba, da por terminado mi nombramiento y hace un nombramiento en periodo de prueba.

1.10 DECIMO: A la fecha, por los efectos del Decreto No. 000568 del 16 de junio de 2022, me encuentro desvinculada de mi cargo y desempleada, lo cual afecta gravemente mis derechos a la Estabilidad Laboral Reforzada Por Fuero De Prepensionado, Seguridad Social, Mínimo Vital, Debido Proceso, Trabajo y es una clara vulneración a mis derechos como sujeto de especial protección constitucional por ser prepensionado y estar sometido a una situación de debilidad manifiesta.

1.11 DECIMO PRIMERO: Señor Juez, los motivos por los cuales recurro a este mecanismo de protección no son arbitrarios ni caprichosos, reconociendo el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, considero que se están vulnerando garantías constitucionales que tanto la Corte Constitucional como la norma han garantizado en cuanto a protección al trabajador que se encuentra en una situación de protección constitucional; lo anterior puesto que el Decreto No. 000568 del 16 de junio de 2022 no me dio la oportunidad de interponer recursos, pese a ser un acto administrativo de carácter particular que modifica una situación jurídica. Lo último tiene como consecuencia que no cuento con ningún otro medio de defensa judicial que sea expedito para buscar la defensa de mis derechos fundamentales

1.12 DECIMO SEGUNDO: Con ocasión al actuar irregular de la Gobernación de Córdoba, en este momento me encuentro en una afectación material que configura un perjuicio irremediable, con base en que al tener 59 años son muy bajas las posibilidades de encontrar cabida en el mercado laboral, y por lo tanto no podría terminar de cotizar las semanas que me restan para lograr acceder a mi pensión, siendo evidente que actualmente cuento con una expectativa legítima de obtener dicha prestación social.

1.13 DECIMO TERCERO: La Gobernación de Córdoba no realizó ninguna acción afirmativa de protección constitucional en pro de salvaguardar mis derechos fundamentales.

1.14 DECIMO CUARTO: Es procedente la protección que se solicitará Señor Juez, pues al ser un mecanismo de protección de forma transitoria, es evidente que se busca evitar la configuración de un perjuicio irremediable, el cual se reitera, consiste en las graves vulneraciones a mis derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y trabajo

1.15 DECIMO QUINTO: Que en el Circuito Judicial de Montería ya existe un precedente judicial sobre la protección constitucional del fuero de estabilidad laboral reforzada por calidad de prepensionado, siendo que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante sentencia de tutela Radicado 23001333300120220018400 protegió los derechos fundamentales mencionados a un funcionario de la Gobernación de Córdoba, con el cual comparto similitud de condiciones fácticas y jurídicas. Es menester indicar que dicho fallo fue modificado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, manteniendo la protección a los derechos constitucionales.

1.16 DECIMO SEXTO: Que al ser este trabajo mi única fuente empleo e ingresos, hay una afectación grave al mínimo vital, ya que hasta no alcanzar mi pensión vitalicia no tendré un ingreso mensual, afectando mi estabilidad económica y la de mi familia. Es por ello Señor Juez, que al desvincularme teniendo la calidad de prepensionada, la Gobernación de Córdoba se encuentra vulnerando también mi derecho al mínimo vital, pues al nombrarme insubsistente, estoy ante un peligro de configuración de un perjuicio irremediable.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar lo siguiente:

2.1 PRIMERO: Conceder el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, mínimo vital, derecho al trabajo, seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada por fuero de prepensionado.

2.2 SEGUNDO: Ordenar la SUSPENSIÓN TEMPORAL del Decreto No. 000568 del 16 de junio de 2022, por medio del cual el Secretario de Educación Departamental de Córdoba realiza un nombramiento en periodo de prueba y se da por terminado un nombramiento.

2.3 TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, sírvase Señor Juez de ordenar al ente demandado lo siguiente:

2.3.1. Reintegrar la señora Nidia Esther Muñoz Pérez, al empleo que ejercía al momento de proferirse los actos de cuya suspensión se solicita, en la planta de personal del Departamento de Córdoba, o en otro de igual o superior categoría.

2.3.2. A pagar los salarios debidamente ajustados, bonificaciones, primas de servicios, navidad, que correspondan el cargo que venía ejerciendo, y las demás prestaciones sociales con incrementos de ley, dejados de percibir por el actor.

2.3.3. Se declare que no ha existido solución de continuidad de la prestación del servicio personal del actor en el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o superior categoría para lo cual será reintegrado al servicio público.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundo esta acción en lo preceptuado por el art. 86 de la Constitución Nacional en concordancia con los arts. 11, 13, 29, 48, y 49 violados y desconocidos y los decretos 2591 y 306 de 1992 y demás normas concordantes y/o complementarias.

4. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES QUE HACEN VIABLE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA

4.1 PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS

La Corte ha señalado desde sus primeros pronunciamientos que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario debido a que su objeto no es el de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los que cuentan los ciudadanos. En este sentido, ha indicado que ante la existencia de otros medios de defensa judicial la acción de tutela por regla general no es procedente. Lo anterior, sustentado en lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional que señala que la acción de tutela “**SOLO PROCEDERÁ CUANDO EL AFECTADO NO DISPONGA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL, SALVO QUE AQUELLA SE UTILICE COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE**”. Dicho mandato

fue reiterado en el desarrollo normativo de la acción de tutela en el numeral 1° del artículo 6 del decreto 2591 de 1991.

La corte constitucional en **Sentencia T-685/16 Respecto la procedencia de la acción de tutela señalo que:**

*A través del artículo 86 constitucional, la acción de tutela se encuentra establecida en nuestro ordenamiento como un mecanismo judicial de carácter preferente y sumario, diseñado para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por parte de cualquier autoridad pública o excepcionalmente de particulares; ante lo cual la Corte ha señalado dos excepciones en las que se admite acudir a esta acción, a saber: (i) cuando se interpone como mecanismo principal, y (ii) **cuando se acude a su ejercicio como herramienta transitoria.***

En este caso teniendo en cuenta las situaciones fácticas y jurídicas hago uso de la tutela como mecanismo transitorio principal para que se ampare y se evite la violación a mis derechos fundamentales y se evite un perjuicio irremediable.

Sobre el segundo escenario, siguiendo la línea jurisprudencial es decir **cuando se acude a su ejercicio como herramienta transitoria.** La misma solo procede con el fin de evitar la realización de un perjuicio irremediable cuya configuración exige la prueba siquiera sumaria de la INMINENCIA, URGENCIA Y GRAVEDAD.¹

Señor juez esta tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable por cumplirse con los tres elementos antes señalados, primero LA INMINENCIA porque a pesar de contar con el medio de control y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con la posibilidad de solicitar la suspensión de dicho acto administrativo, la idoneidad del medio de control se desdibuja es decir, se pierde por la naturaleza del medio, que al ser ordinario es sumamente tedioso el trámite expedito del mismo, sumado a la ya conocida congestión judicial, que haría viable un fallo, siendo optimistas, entre 2 y 3 años luego de radicada la tutela, lo cual configuraría un perjuicio irremediable a mis derechos fundamentales.

Sobre este aspecto la H. Corte Constitucional en sentencia T-342 de 2021 señalo que:

*“La Sala de Revisión recuerda que esta Corte ha admitido la procedencia excepcional del amparo constitucional “para solicitar el reintegro de servidores públicos a los cargos de los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se advierte la vulneración de un derecho fundamental y se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, **toda vez que en estos eventos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no proporciona una protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados.**”*

*“Posteriormente, en la decisión T-464 de 2019, [39] la Corte volvió a pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela cuando el accionante es una persona desvinculada de un cargo que ocupaba en provisionalidad, con ocasión de la provisión del mismo con la lista de elegibles. En esta providencia se reiteró la sentencia citada en el párrafo anterior para sustentar **la procedencia del amparo constitucional para solicitar el reintegro cuando se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable.**”*

En concordancia con esto la Honorable corte señala además que:

¹ SENTENCIA T- 685/16. ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia excepcional para solicitar el reintegro de servidores públicos por ser prepensionado.

(...)

Existe **inminencia** porque con la desvinculación del cargo que ocupaba, es mi intención poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa en el futuro, que lo hare, la consecuencia directa es la ausencia de recursos económicos pone en riesgo y afecta mi derecho al mínimo vital ya que no tendré una remuneración mensual, causando gran afectación a la economía de mi hogar, sumado a lo propio en el sentido de que no podré seguir cotizando a pensión, por lo cual se desdibuja mi expectativa de derecho a ser titular de dicha prestación.

Respecto a esto al estado de vulnerabilidad al estudiar la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y los elementos que determinan la configuración de un perjuicio irremediable la H. corte en sentencia T- 685 de 2016 preciso que:

“En segundo lugar, el accionante pertenece a un grupo poblacional afectado por condiciones de vulnerabilidad manifiesta, pues el tener 59 años de edad claramente si bien no lo hace estar vinculado a la tercera edad, sí lo hace encontrarse en condiciones que dificultan su inclusión en el mercado laboral, lo cual se torna importante si se tiene en cuenta que el conflicto formulado en la acción de tutela está enmarcado estrictamente en el ejercicio del derecho al trabajo.”

Señor juez, la desvinculación del cargo que he venido ocupando que si bien es cierto será ocupado por quien supere el concurso, mis derechos fundamentales al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada y mi derecho al trabajo serian vulnerados y se me estaría ocasionando perjuicio irremediable.

Así las cosas, señor Juez, es irremediable porque el único sustento que tengo es el ingreso de mi salario y con esto afectación al mínimo vital, además de mis compromisos económicos los cuales serían de imposible cumplimiento pues no voy a contar con los recursos para cumplir con el pago.

La desvinculación de la entidad accionada con ocasión al concurso de méritos y el **acto de desvinculación implica dejar de cotizar y eliminar la posibilidad y el derecho de acceder y ver materializado mi derecho a la pensión consagrado en la ley 100 de 1993. Pues actualmente ostento la calidad de prepensionado**, esta desvinculación señor juez claramente viola mi derecho a la estabilidad laboral de los prepensionado que tiene origen constitucional y por ende resulta aplicable al presente caso, así lo señalo la H. Corte en sentencia T- 685 de 2016 en la cual señalo que:

“En otras palabras, el fundamento de la estabilidad laboral de los prepensionado tiene origen constitucional y, por ende, resulta aplicable en cada uno de los escenarios en que entren en tensión los derechos al mínimo vital y la igualdad, frente a la aplicación de herramientas jurídicas que lleven al retiro del cargo”.

Con relación al tercer elemento este es la **URGENCIA** la H. Corte Constitucional en la sentencia en mención preciso que:

“Cumpliéndose el criterio de la inminencia, para esta Sala es claro que también se supera el requisito de la urgencia, pues, como lo ha señalado esta Corporación, acreditándose la primera condición es claro que la segunda se encuentra superada, comoquiera ésta se refiere a la adecuación de la medida judicial pronta (tutela) a las circunstancias que hacen evidente la proximidad del

perjuicio que, en este caso, se hace evidente por la situación económica que presenta el accionante y su grupo familiar.”

Respecto al requisito de **GRAVEDAD** me permito manifestar que este se encuentra acreditado puesto que el hecho constitutivo del perjuicio es la desvinculación y como consecuencia a esto la ausencia de los recursos económicos que dejaría de percibir afectándose mi derecho al **mínimo vital** pues no cuento con ninguna fuente económica que garantice suplir mis necesidades básicas. Afectación que se encuentra plenamente probada en esta acción de tutela.

Respecto el requisito de **IMPOSTERGABILIDAD** señor juez dicha tutela es procedente con el fin de evitar un perjuicio irremediable por cuanto se encuentra demostrada la inminencia, la gravedad y la urgencia del pronunciamiento suyo y estudio de la presente acción de tutela, con el fin de proteger mis derechos fundamentales que están siendo vulnerados por la entidad territorial.

4.2 ESTABILIDAD LABORAL POR FUERO DE PREPENSIONADO / ESTABILIDAD LABORAL POR DICHO FUERO A SERVIDORES PUBLICOS EN PROVISIONALIDAD

Amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido expresamente a la estabilidad laboral por fuero de prepensionado como una prerrogativa constitucional para la protección de los trabajadores que están próximos a pensionarse y tiene una expectativa legítima de acceder a ese derecho.

Es así como la misma jurisprudencia ha reglado que los prepensionados son sujetos de especial protección constitucional y que dicho alcance, si bien no es absoluto, tiende a garantizar la estabilidad laboral de la persona hasta tanto no obtenga su derecho adquirido.

En tanto la Sentencia T-595 de 2016 de la Corte Constitucional, reza lo siguiente:

“Prepensionado en el contexto del examen de solicitudes de amparo constitucional, es aquella persona que fue retirada de su puesto de trabajo faltándole 3 años o menos para cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas, según sea el caso, que le permitan acceder a la pensión de vejez. Respecto de los requisitos para acceder a la pensión, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, consagra que para tener derecho a la pensión de vejez el afiliado debe (i) haber cumplido 57 años de edad en el caso de la mujer y 62 años para el hombre y (ii) haber cotizado 1300 semanas. Por tanto, no basta con que una persona acredite el cumplimiento de uno de los dos requisitos, pues la norma dispone dos condicionamientos para acceder a dicha prestación social. En idéntico sentido ocurre para quienes pretendan hacer valer su condición de prepensionado, es decir, para que a una persona le sea reconocido el beneficio de la estabilidad laboral por encontrarse próxima a pensionarse, su rango de edad puede variar entre los 54 y 57 años si es mujer, y entre los 59 y 62 años si es hombre, e incluso puede ser mayor, pero además, le debe faltar máximo 156 semanas por cotizar, que corresponden a 3 años.”

De ahí, que en mi condición cumplo con lo reglado en dicho aparte jurisprudencia, siendo que actualmente cuento con 59 años y 1252 semanas cotizadas, de lo que se concluye que me quedan menos de 48 semanas para acceder al requisito de semanas cotizadas.

Por otro lado, con respecto a la estabilidad laboral por fuero de prepensionado en servidores públicos nombrados en provisionalidad, se ha definido lo siguiente:

*Esta Corporación ha reconocido que cuando un funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera, y es además sujeto de especial protección constitucional, como por ejemplo, madres o padres cabeza de familia, **funcionarios que están próximos a pensionarse** o funcionarios que padecen discapacidad física, mental, visual o auditiva, “concorre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa”. Si bien estas personas no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse por medio de concurso de méritos, **si debe otorgárseles un trato preferencial como acción afirmativa**, antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.²*

Soportando lo mencionado anterior, es claro referenciar que la Sentencia T-685 de 2016 citó:

Un empleado público que se encuentra vinculado en el nivel territorial, dentro de una entidad descentralizada y en un cargo de libre nombramiento y remoción, es titular del beneficio constitucional de prepensión, siempre que le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de vejez, y sus funciones no correspondan a la formulación, manejo o dirección de las políticas estatuidas por su superior jerárquico.

La misma jurisprudencia reitera de forma clara:

“Aquellos funcionarios provisionales que ostentan la condición de prepensionados tienen derecho a permanecer en sus empleos hasta tanto causen su derecho a la pensión.”

Lo cual se complementa con lo reglado en la Sentencia T-595 de 2016, la cual afirmó que:

En síntesis, la Sala colige que la estabilidad laboral reforzada de la que gozan los prepensionados no es solo aquella que se desprende del retén social, sino que es una garantía susceptible de exigirse (i) ante la existencia de un vínculo laboral administrativo de funcionarios nombrados en propiedad o en provisionalidad y (ii) en los eventos en los que al solicitante desvinculado de su lugar de trabajo le falten 3 años o menos para cumplir los requisitos, edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas, para adquirir el derecho pensional. En todo caso, el examen en sede de tutela de estas hipótesis exige un estricto examen de subsidiariedad, tal y como la Corte lo ha hecho en esta oportunidad.

Reafirmó la Corte Constitucional en el extracto en cita los requisitos para hacer exigible la protección constitucional señalada, reiterando que cumple con los mismos. Por lo anterior, reitero Señor Juez que es procedente la protección petitionada, en vista de que el examen de subsidiariedad se describió conforme al punto 4.1.

² Sentencia T-156 de 2014

Señor Juez, está debidamente descrito y a su ponderación los hechos, datos, pruebas y evidencias necesarias para que demostrar la existencia de una vulneración clara a mis derechos, y que es procedente la protección constitucional, por tanto, de omitir pronunciación el Juez Constitucional podemos estar ante una configuración de un perjuicio irremediable, el cual manifestaría un grave perjuicio a mis derechos constitucionales y expectativas de acceder al derecho.

4.3 NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR FUERO DE PREPENSIONADO

Respecto A este punto, evidenciamos que no solo la Corte Constitucional se ha referido al tema. En este caso, vemos que el Gobierno Nacional compiló todo lo correspondiente al Sector de Función Pública en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015.

Posteriormente, el Decreto 1415 2021, artículo 3, por el cual se adicionó el artículo 2.2.12.1.2.5 al Decreto 1083 de 2015 consignó lo siguiente:

"ARTÍCULO 2.2.12.1.2.5. De la reubicación para los servidores públicos prepensionados. En cumplimiento de la protección especial en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos, los servidores públicos que les falten (3) tres años o menos para obtener la pensión de jubilación o vejez y no puedan continuar en el ejercicio de su cargo por razones de reestructuración o provisión definitiva, deberán ser reubicados como lo señala el artículo 8 de la Ley 2040 de 2020 hasta tanto cumplan con los requisitos para obtener el beneficio pensional. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 1 del artículo 2.2.12.1.2.2."

En ese orden de ideas, la Ley 2040 de 2020, se refiere a la protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos:

ARTÍCULO 8°. Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos. Las personas a las que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez, que hagan parte de las plantas de las entidades públicas en nombramiento provisional o temporal y que, derivado de procesos de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito, deberían ser separados de sus cargos, serán sujetos de especial protección por parte del Estado y en virtud de la misma deberán ser reubicados hasta tanto adquieran los requisitos mínimos para el acceso al beneficio pensional.

De esa forma, el Legislador reconoce la condición de prepensionado y le concede especial protección por parte del Estado, dando pautas sobre la obligación de la entidad de reubicar al funcionario hasta tanto no haya adquirido los requisitos mínimos para el acceso a la pensión.

De esa forma, tanto la Ley 2040 del 2020 como el Decreto 1415 de 2021 se complementan en pro de aclarar y normativizar la protección especial del prepensionado.

Señor Juez, con la argumentación expuesta en este punto, esta claro y demostrado que las acciones de la Gobernación de Córdoba fueron lesivas a mis derechos y prerrogativas constitucionales y fundamentales, siendo que a todas luces cumplo con todos y cada uno de los requisitos para ostentar la calidad de prepensionado, que la misma fue reconocida por mi empleador y que no se tuvo en cuenta esa especial protección constitucional al momento de expedirse el mencionado Decreto.

4.4 PRONUNCIAMIENTO DEL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERIA Y SU RATIFICACIÓN POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante sentencia de tutela Radicado 23001333300120220018400 protegió los derechos fundamentales mencionados a un funcionario de la Gobernación de Córdoba, con el cual comparto similitud de condiciones fácticas y jurídicas.

En dicho caso, la Unidad Judicial en cuestión protegió los derechos a un funcionario de la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba que ostentaba la calidad de prepensionado contado con 60 años de edad y 1179.71 semanas cotizadas y que fue declarado insubsistente por estar en vigencia lista de elegibles para el cargo.

Pues bien, conforme a lo probado y los fundamentos de la decisión, encuentra el Despacho que, al actor le hacen falta aproximadamente 2 años y 3 meses de semanas cotizadas (aproximadamente 120 semanas), para completar las 1300 semanas requeridas y; 1 año y 10 meses para cumplir la edad (62 años), con el fin de, obtener el derecho de la pensión de vejez, conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, aplicable al actor. Lo anterior, acredita que el actor ostenta la calidad de prepensionado de conformidad con los antecedentes jurisprudenciales anotados, por faltarle menos de 3 años para cumplir los requisitos tendientes a adquirir el derecho pensional

De otro lado, indicó que en la ponderación de derechos fundamentales entre la persona que superó el concurso de méritos y el prepensionado con nombramiento en provisionalidad, rezó:

Sin embargo, la imposibilidad de reintegrar al actor en el cargo que desempeñaba en provisionalidad, no obsta, para que se amparen los derechos fundamentales invocados por el actor, dada su condición de prepensionado, pues, estos derechos, específicamente el de mínimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, se ven afectados al no poder contar el actor con los ingresos necesarios para seguir cotizando las semanas requeridas para acceder al derecho pensional, conforme la normativa que le es aplicable, en razón, a la dificultad que puede surgir para conseguir un nuevo empleo y asegurar los recursos económicos para tal fin, afectando en ese sentido, la expectativa legítima de obtener la prestación económica.

Es menester indicar que, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión MP Diva Cabrales Solano, en sede de impugnación validó los argumentos esgrimidos por el juzgador de primera instancia, al manifestar que:

Así las cosas, para la Sala está debidamente acreditado en el sub lite, la calidad de prepensionado del accionante al momento de ser retirado del servicio, dado que, en efecto le faltaban menos de 3 años para cumplir con el mínimo de 1300 semanas cotizadas para adquirir el derecho a gozar de una pensión de jubilación.

Siendo así, la entidad accionada debió realizar acciones afirmativas a favor de la estabilidad laboral reforzada del tutelante, como tal y lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia T-063 de 2022, ya citada: "(...) las entidades deben proceder con especial cuidado antes de efectuar los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas afirmativas, (dispuestas en la constitución art. 13 numeral 3º, y en la materialización del principio de solidaridad social -art. 95 ibidem-) relativas a su reubicación, y en caso de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como en el momento del posible nombramiento".

(...)

En consecuencia, de conformidad con el precedente jurisprudencial en materia constitucional se deben adoptar medios que hagan efectivas las garantías a tales derechos en cabeza de las personas cobijadas por esa estabilidad laboral, ello sin perjuicio de afectar a quien por concurso de méritos ostenten un mejor derecho.

Por lo dicho se confirma lo decidido por el A-quo respecto de amparar los derechos del accionante al mínimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, sin embargo, se modificará y precisará la orden en el sentido que la Sala ordena al Departamento de Córdoba, que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad, vincule al señor Janio Abraham Martínez Polo a un cargo igual o equivalente al que ocupaba.

5. DERECHO FUNDAMENTAL

Derecho fundamental a la Estabilidad Laboral Reforzada Por Fuero De Prepensionado, Seguridad Social, Mínimo Vital, Debido Proceso, Trabajo y demás que Su Señoría encuentre probada su vulneración.

6. PRUEBAS Y ANEXOS

Me permito anexar los siguientes documentos para que sean tenidos y valorados como prueba de la presente solicitud:

1. Cedula de ciudadanía
2. Decreto 000458 de 1989, expedido por la Secretaría de Gestión Administrativa.
3. Acta de posesión de Acta de Posesión de 19 de mayo de 1989
4. Derecho de petición de 25 de mayo de 2022 con el radicado COR2022ER014363
5. Decreto No. 000568 del 16 de junio de 2022
6. Oficio Nro. 000227. Dr. Hernando de la Espriella Burgos, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Córdoba.
7. Historia Laboral emitida por Colpensiones.

7. JURAMENTO Y AUSENCIA DE TEMERIDAD

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he presentado otra acción constitucional o judicial, por razón de estos mismos hechos y derechos.

8. NOTIFICACIONES

- 1) **EL ACCIONANTE:** En la Carrera 2 #27-41. Edificio Araujo y Segovia. Piso 6. Oficina 603. Correo electrónico: marquezymarquez@hotmail.com
- 2) **LA ENTIDADES ACCIONADAS:**

Gobernación de Córdoba: Calle 27 #3-28 Palacio de Nain. Montería, Córdoba.
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cordoba.gov.co

Comisión Nacional del Servicio Civil: Carrera 12 No 97- 80, Piso 5 - Bogotá
D.C. Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cnscc.gov.co

Señor(a) Juez con distinción y respeto,

NIDIA ESTHER MUÑOZ PEREZ
C.C. 50.846.751 de Cereté – Córdoba